

Santiago, quince de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el denunciado contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primera instancia que acogió la denuncia y condenó a don Alex Jara García, armador de la embarcación “*Benjita*”, como autor de la infracción del artículo 63, sancionado en el artículo 113, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, con relación a los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N°129, del año 2013, consistente en entregar información no fidedigna al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, al pago de una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales.

I. En lo relativo al recurso de casación en la forma:

Segundo: Que el recurrente esgrime la causal prevista en el numeral quinto del artículo 768, por omisión en la sentencia de los requisitos del artículo 170 N°4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, al no contener las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, ni la enunciación de las leyes con arreglo a los cuales se pronunció, dado que el fallo impugnado se limitó a señalar que confirma la resolución de primer grado, sin hacerse cargo de las alegaciones vertidas en su arbitrio.

Solicita se acoja el recurso de casación en la forma, se invalide la sentencia recurrida y se dicte la de reemplazo que describe.

Tercero: Que procede tener en consideración que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, la falta de motivación del fallo concurre sólo cuando la sentencia carece de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, mas no tiene lugar cuando aquellos existen, pero no se ajustan a la tesis postulada por la reclamante.

En efecto, en el caso bajo examen la parte recurrente hace descansar esta aparente omisión, en la falta de fundamentación de la decisión. Sin embargo, la sentencia impugnada entrega los fundamentos de lo resuelto al señalar que hace suyos los argumentos de la sentencia de primera instancia, es decir, que siendo de cargo del denunciado desvirtuar la presunción de haberse cometido la infracción, no rindió prueba suficiente, idónea e indubitada, capaz de cumplir tal fin, motivo por el cual necesariamente debe entenderse que los hechos se suscitaron, configurándose los elementos constitutivos de la infracción, dado que



no compareció a la audiencia de estilo y no acreditó la veracidad del contenido de los documentos, consistentes en solo declaraciones unilaterales respecto de los desembarcos.

Además, tal como se lee de la misma sentencia, ésta enuncia cada una de las normas en que se afinca y, en consecuencia, sin que se incurra en la causal alegada en este arbitrio, éste deberá ser rechazado.

I. En lo relativo al recurso de casación en el fondo:

Cuarto: Que el recurrente denuncia infracción a los artículos 125 de la Ley General de Pesca, específicamente el número 4 y 1 y 19 N°3 de la Constitución Política de la República, dado que la sentencia no explicita cuáles son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados que rigen el sistema de valoración, contenido en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, limitándose a detallar diversos medios de prueba allegados, otorgándole un excesivo alcance a la presunción del artículo 125 N°1 inciso final de la Ley de pesca, pero no indica de qué modo la referida prueba logra satisfacer el estándar probatorio exigido, vinculándola con aspectos antes reseñados, y que son propios del sistema de valoración referido, anclando su dictamen en el hecho de simplemente no haberse rendido prueba en contrario.

Pide se acoja el recurso de casación en el fondo, se invalide la sentencia recurrida y se dicte la de reemplazo que describe.

Quinto: Que la sentencia la sentencia impugnada tuvo por establecidos los siguientes hechos:

1. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura constató que don Alex Luciano Jara García, armador de la embarcación “*Benjita*”, ingresó e informó, a través del Sistema de Trazabilidad del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, siete declaraciones de desembarque artesanal, entre los días 10 y el 15 de abril del año 2020, realizadas en la Caleta Tubul.
2. El Capitán de Puerto de Lota informó que en Caleta Tubul, en el periodo comprendido entre los días 9 y el 17 de abril de 2020, no existen registros de zarpes ni recaladas asociadas a la embarcación.
3. El denunciado no compareció a la audiencia de estilo y no acreditó la veracidad del contenido de los documentos que acompañó, consistentes en declaraciones unilaterales respecto de los desembarcos, como son



los reportes de desembarque artesanal de la embarcación “Benjita”, reportes comercializadora de abastecimiento, reportes comercializadora de destino, y guías de despacho del cargamento de dicha nave.

Sobre estos presupuestos fácticos concluyó que la información de la embarcación no es coincidente con lo informado por la Capitanía de Puerto de Lota, por lo que las declaraciones de desembarque presentadas por la denunciada, entre las fechas 9 y 15 de mayo de 2020, no son fidedignas, sin que lograra desvirtuar la presunción simplemente legal contenida en el artículo 125 N°1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Sexto: Que, como esta Corte ha señalado reiteradamente, la determinación de los hechos corresponde a una facultad que se ejerce exclusivamente en las instancias del fondo, sin que sea dable su revisión en esta sede, a menos que se denuncie y acredite el quebrantamiento de disposiciones que integran el sistema valorativo de la sana crítica, o que la sentencia no se hizo cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que desestimó, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo. De esta manera, la judicatura al razonar debe someterse al proceso lógico y al exteriorizarlo debe dar cuenta que atendió las leyes o principios lógicos supremos del pensamiento que presiden la elaboración de los discernimientos y proporcionan la base cierta para determinar cuáles son verdaderos o falsos; y que están constituidos por las fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente; precisando las máximas de la experiencia que tuvo presente y/ o los conocimientos científicamente afianzados en los que funda su resolución.

Séptimo: Que, en la especie, si bien se acusa infracción al artículo 125 N°1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo cierto es que el recurrente no desarrolla con precisión el modo en que se produjeron las vulneraciones, limitándose a reprochar la forma en que la judicatura ponderó la prueba y mencionando el principio de razón suficiente. Por lo tanto, la crítica se concentra en la valoración la prueba efectuada, de cuyo resultado disiente, pero al no haber acreditado la conculcación de las reglas que componen el sistema de la sana crítica, no es posible alterar el marco fáctico de la decisión por medio de este mecanismo extraordinario y de derecho estricto.

Octavo: Que, de esta forma, sobre la base de los hechos establecidos de manera inamovible en el fallo impugnado, debe concluirse que la decisión es



producto de una correcta aplicación de las normas sustantivas que regulan la materia de que se trata.

Noveno: Que, en consecuencia, los tribunales del fondo efectuaron una correcta aplicación de las normas jurídicas pertinentes al caso, por lo que no cabe sino concluir que el recurso debe ser desestimado por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se **rechazan** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos contra la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil veinticinco.

Regístrese y devuélvase.

N°12.262-25.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M., Ministra Suplente Inés María Beatriz Letelier F. y los Abogados (as) Integrantes Fabiola Esther Lathrop G., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, quince de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a quince de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

